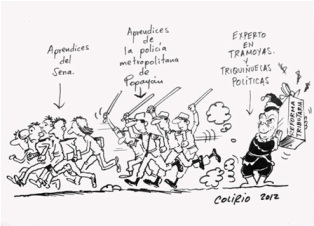
[Con la reforma tributaria los ricos llorarán…pero de la risa](http://www.periferiaprensa.org/index.php/component/content/article/172-ediciones-anteriores/edicion-80-enero-2013/1117-con-la-reforma-tributaria-los-ricos-lloraran-pero-de-la-risa)

****

**Cuando el presidente Santos anunció en los medios de comunicación la nueva reforma tributaria, afirmó que los ricos llorarían con esta, lo que no nos dijo es que llorarían…pero de la risa. Así lo muestra el análisis de distintos sectores académicos, políticos y de distintos sectores de opinión que coinciden en que esta nueva carta de Santos no es una reforma que apunte realmente a mejorar “la equidad y el empleo digno y estable”, como lo afirmaba él en un diario nacional. Por el contrario,  es una reforma que amplía los beneficios al capital nacional y transnacional,  vía reducción de  impuestos, sumándose a la gran cantidad de exenciones tributarias que estas reciben por invertir en el país, aunque esto no se traduzca en más ni mejor empleo.**

Para entender la nueva reforma tributaria hay que apelar a los conceptos básicos de la hacienda pública: los ingresos que obtiene un Estado son de dos tipos, tributarios (impuestos) y no tributarios (utilidades de algunas empresas públicas, tasas y multas, rendimientos financieros y los ingresos por venta de licencias de explotación de nuestros recursos naturales). Respecto a los ingresos tributarios, es decir, los impuestos, son de dos tipos, los directos, que recaen sobre las rentas del trabajo y las ganancias y otros, como los que gravan la riqueza, la tierra, los bienes inmuebles y el patrimonio; y los indirectos, que son aquellos que gravan las transacciones de bienes y servicios, como los impuestos al consumo (que gravan la gasolina y las bebidas alcohólicas), los impuestos a las ventas (que gravan las ventas finales de los bienes y servicios), o los impuestos a las importaciones (arancel).

En este orden de ideas, lo que quiere hacer el gobierno de Santos con la nueva reforma tributaria es lo siguiente: hacer recaer una mayor parte de los ingresos del Estado sobre el aumento de los impuestos indirectos y disminuir los impuestos directos, mediante la disminución de la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a las personas jurídicas (entiéndase sociedades o empresas) y el aumento de los bienes y servicios gravados con el impuesto a las ventas (IVA). En otras palabras, disminuir los impuestos a los de más altos ingresos y trasladarle la carga tributaria al ciudadano del común.

**La reforma tributaria: un lobo disfrazado de oveja**  
Son varios elementos que hacen dudar de las buenas intenciones del gobierno Santos con dicha reforma. Primero, la presentación de la nueva reforma tributaria “coincidió” con varios informes en los distintos diarios nacionales, especializados en temas de economía y finanzas, sobre la competitividad del país. En estos informes se llegaba a la conclusión de que el país era poco competitivo, y ocupaba, según el índice de competitividad Doing Bussines, el puesto número 136 de 144 países del ranking, entre los cuales se contaban a EEUU, Brasil, Nicaragua, México, Chile y Argentina, entre otros. El énfasis de dichos informes se concentró en que Colombia registraba uno de los niveles más altos de tarifas de impuestos como porcentaje de las utilidades, muy por encima de los países antes mencionados y que el impacto de dichos impuestos sobre los incentivos a trabajar e invertir era uno de los más bajos. Lo curioso de dichos informes es que no se hizo ningún énfasis en otros elementos que aparecían, antes que las tarifas de impuestos, como los primeros causantes de la falta de competitividad de Colombia, según el mismo indicador, a saber: la corrupción, la ineficiencia en la burocracia del gobierno, la insuficiente infraestructura para el transporte de mercancías, la falta de acceso al financiamiento, el crimen y el robo.

Si los anteriores factores pesaban más en la falta de competitividad del país que la tasa de impuestos, ¿por qué no se están tramitando proyectos de ley que apunten a superar dichas situaciones? ¿en dónde están las acciones del Estado respecto a la corrupción y a la ineficiencia de la burocracia estatal, más conocida como clientelismo? Nada, no se ha hecho nada, ni existe interés de hacerlo.

Otro elemento curioso es que las reformas tributarias se hacen, generalmente, para obtener más ingresos por impuestos, sobretodo en países como el nuestro, en donde los gastos del gobierno nacional han superado históricamente los ingresos, causando déficit fiscales recurrentes. Pero el gobierno, a través de su Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, manifestaba en entrevista al canal Caracol el 20 de diciembre del 2012, que con esta nueva reforma “no se desea obtener más recursos, sino redistribuir la carga tributaria”, es decir, que unos paguen más y otros paguen menos.

La reforma fue aprobada por el Congreso el pasado diciembre. Consta de un total de 192 artículos que tocan, en general, temas como la eliminación de las contribuciones parafiscales, el impuesto a la renta a las personas naturales o retención en la fuente, la reducción a los impuestos por ganancias ocasionales (herencias, ventas de activos, entre otros), la simplificación de las tasas de IVA, la reducción de algunas tarifas y la creación de otras, como el impuesto a los productos lujosos, el impuesto al “corrientazo” y a la medicina pre-pagada, la reducción en el precio de la gasolina y la creación de un nuevo impuesto llamado de “equidad”, para sustituir la eliminación de los parafiscales, de los cuales instituciones como el SENA, el ICBF y el sistema de salud han obtenido sus recursos.

**El impacto sobre el Sena, el ICBF y sistema de salud**  
Los puntos que más preocupan sobre la nueva reforma tributaria tienen que ver con la reducción de los impuestos a la renta de las personas jurídicas, es decir, a las empresas y las sociedades, que está acompañado de la eliminación de los parafiscales y la tarifa de impuesto que se cobrará a las personas naturales, vía retención en la fuente. Preocupante, porque a leguas es claro que el gobierno quiere rebajar la carga tributaria a los más pudientes y descargar dicho peso sobre el común de los ciudadanos, como se da a entender por las palabras del Ministro Cárdenas más arriba. Esto se refleja en el hecho de que las utilidades de las empresas seguirán gravadas con un 33 por ciento -correspondiente al 25 del impuesto de Renta y el ocho del impuesto para la Equidad, que reemplazará a los parafiscales-; pero dejarán de pagar los parafiscales que son el 13,5 por ciento de la nómina. Como el impuesto a la Equidad se pagará al final del año, mientras que los parafiscales se pagan mes a mes, las empresas también tendrán un alivio en sus pagos mensuales.

Esto significa que finalmente el Sena, el ICBF y el sistema de salud recibirán menos ingresos, afectando su cobertura y la calidad en su servicio, aunque el gobierno insiste en que, por el contrario, aumentarán, sin claridad de dónde saldrán los recursos que perderán dichas entidades. En relación a esto, una funcionaria de la Dirección Regional del Sena en Antioquia afirma que “la reforma tributaria afectará mucho al Sena, ya que la liquidez y la viabilidad financiera que la institución ha tenido, a partir de la segunda mitad del 2015 no existirá más, porque los ingresos que reciba el Sena dependerán de un reducido grupo de empresas, y recordemos que gran parte de la estructura productiva del país se sustenta en las pequeñas y medianas empresas... esto hará que el Sena reciba menos de la mitad del presupuesto que recibía hasta hoy a nivel nacional”.

En relación al impacto de la reforma tributaria sobre la cobertura y la calidad de la formación, la funcionaría anotaba: “…en cobertura podemos decir que el Sena está sobrado y en calidad seguimos mejorando, dotando con mejor tecnología los ambientes de aprendizaje, pero la reducción en el presupuesto podría afectar estos aspectos”. Por último, la funcionaria anotaba que “la reducción en el presupuesto obligará al Sena a trabajar en muchas alianzas, muchos sectores empresariales deberán hacer uso de las instalaciones de la institución y en este orden de ideas necesariamente se llegará al punto de cobrárseles a los aprendices por acceder a la formación en el Sena, cuando hasta el momento es gratuita”.

Por otra parte, el supuesto deseo del gobierno de reducir las exenciones en el pago de impuestos al gran capital no es sino una falacia, ya que la reducción o eliminación de los beneficios tributarios exclusivos de las multinacionales o grandes empresas fueron estabilizados (congelados) hasta por 20 años mediante la suscripción de contratos de estabilidad jurídica. Todo esto logrará como objetivo, según lo ha manifestado el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, “bajar los costos laborales, crear más empleo formal y las empresas que se han visto tan afectadas por la revaluación recuperarán la competitividad”. Pero es de dudar que tal medida logre su objetivo porque, como lo ha expresado el ex director de Impuestos, Horacio Ayala, "uno no puede crear empleos por decreto, sino por razones económicas". De igual manera opina el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC-, Rafael Mejía, cuando ha señalado a los medios nacionales que “las empresas contratan más trabajadores cuando venden más y cuando a la economía le va bien, y no necesariamente porque bajen los parafiscales”.

El otro punto que hace intuir lo regresiva que puede ser la reforma tributaria tiene que ver con el pago del impuesto que se conoce como retención en la fuente. Respecto a este punto, el gobierno decidió ponerles límite a los beneficios que los trabajadores usan para disminuir el impuesto a cargo. Y por otro lado, se crea el llamado Iman (impuesto mínimo alternativo), una tabla que establece un piso para el pago de impuestos en el caso de los obligados a declarar renta. El nuevo texto del proyecto de Reforma Tributaria tiene un aumento en las tarifas del impuesto de renta 'Iman' de hasta el 45% para quienes ganan entre 3 millones 360 mil pesos y 6 millones de pesos, denunciaba el representante a la cámara Simón Gaviria, luego de una reunión con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega.

Esta medida hará que finalmente la población que conocemos como clase media tenga que ir pagando un impuesto progresivo en la medida que aumente sus ingresos laborales. Respecto a esto, el senador Jorge Robledo, crítico acérrimo de los TLC´s y de la nueva reforma tributaria, ha manifestado que la reforma es regresiva, ya que “les disminuye en $8,06 billones los impuestos a las empresas más poderosas y para compensar los aumenta al pueblo raso y a las capas medias”.

De esta manera, la nueva reforma tributaria ahondaría el camino que desde los 90´s vienen siguiendo la reforma neoliberal en materia fiscal, en la cual cada vez pesa más en los ingresos del Estado los impuestos indirectos (los que pagan el común de los ciudadanos) como el IVA, que ya superaban en 1994 45% del recaudo total de impuestos, mientras que el recaudo por impuestos directos (los que pagan las sociedades y las empresas) está por debajo de este monto.

Por otra parte, no es una reforma que apunte a mejorar el empleo, ya que las reformas laborales neoliberales se han encargado de informalizarlo, a través de la disminución de las indemnizaciones por despidos y la contratación por servicios. La reforma más bien va dirigida a aumentar la competitividad de las empresas colombianas por la vía de la reducción en la carga tributaria, ya que la presión que genera en términos de competencia la firma de los tratados de libre comercio con EEUU, Unión Europea y los que están en etapa de negociación, como son los que se quieren firmar con Costa Rica, Israel, Turquía, Panamá y Japón, es bastante fuerte.

Por último, contrastan las gabelas que el gobierno de Juan Manuel Santos quiere dar a los empresarios del país con el bajo aumento que pretenden dar al salario mínimo en Colombia, ya que, según un informe reciente de la OIT, el aumento de este en los últimos 10 años ha estado por debajo del promedio de América Latina, aumentando apenas un 1,3% en términos reales en comparación a un 3,4% del resto de la región; acompañado de “trabajos por debajo de la jornada normal, remuneraciones cercanas al mínimo y personas que se dedican a actividades diferentes a las que se formaron”, como lo afirmaba al diario la República el profesor de economía German Novoa de la Universidad Nacional, respecto al informe de la OIT.